



Con las banderas en alto marchan los estudiantes

Artículo publicado en la edición de junio de Le Monde Diplomatique

En los últimos días se han visto resurgir las movilizaciones en el ámbito de la educación. Lo que no debiera extrañar si las situamos en el plano de un conflicto histórico por construir un proyecto distinto de ella. La petición de los universitarios el 12 de mayo nace de la indolencia del aparato estatal hacia los estudiantes de clases populares, muchos afectados por el terremoto¹. Sin embargo se enraíza en razones mucho más profundas, como el que la educación superior sea la única área en que la LOCE se mantiene vigente, con lo que el entramado legal pinochetista se mantiene incólume.

No debemos olvidar que el acuerdo en materia educativa, alcanzado el año 2007 entre las cúpulas de la derecha y concertación, reproduce los intereses gremiales de la elite, y mantiene los pilares del sistema educativo mercantil, privatizador y segregador. Por ello las políticas presentadas por el nuevo gobierno son de continuidad, entre otras cosas, mantienen la igualdad de trato respecto de los recursos que aporta el estado a las instituciones privadas y públicas, que pertenecen al CRUCH, lo que en los hechos implica que las universidades estatales siguen obligadas a auto financiarse, a privatizarse.

Los motivos de la crisis que los estudiantes reclaman son los mismos que generaron movilizaciones en los actores de la educación obligatoria, estudiantes secundarios, docentes, asistentes de educación, apoderados. Sin embargo, el modo de expresarse es distinto. En la educación superior se ha generado una masificación de la matrícula como nunca antes se vio. Esto en sí mismo debiera ser una señal de alegría, sin embargo existe una separación tajante entre los tres sistemas de educación superior y existe un acceso diferencial según clase social. Además, al dejarse el crecimiento de la oferta en manos simplemente del mercado, nuestro país renunció a la necesidad de contar con un proyecto de educación nacional, en función de un proyecto de país para las mayorías. El crecer de esta forma la oferta de matrícula, seguimos teniendo pocas y elitistas instituciones de educación superior que generan conocimiento y un sin fin de “ofertones” educativos sin consistencia, sin claridad de que calzan con las posibilidades futuras de empleo, con profesores “taxi” a los cuales se les paga precariamente solo por repetir materias. En el caso de los Centros de Formación Técnica (CFT) y los Institutos Profesionales (IP) sólo existen instituciones privadas, Chile es tal vez el único país del mundo sin instituciones de formación técnica estatales, un área clave en el desarrollo de países como los nuestros. En la educación universitaria el fenómeno ha tendido a concentrarse en lo que los investigadores llaman la separación entre las universidades de alta selectividad y

¹ Para los puntos del petitorio de las movilizaciones del 12 de Mayo véase: <http://www.elciudadano.cl/2010/05/12/masiva-movilizacion-en-santiago-durante-paro-nacional-estudiantil/>

las de baja selectividad, o también universidades burbuja versus las de garaje². Esto ha producido un alto nivel de segmentación en la población universitaria.

Por otra parte los sistemas de financiamiento a la educación superior la han convertido en completamente privada, en la medida que su financiamiento depende en más de un 70% de la mensualidad de los estudiantes y de los servicios que las universidades venden al sistema privado, incluso en las universidades estatales³. Esto ha implicado que el gasto educativo que hacen las familias en Chile sea el más alto entre los países de la OCDE, al cual Chile acaba de ingresar⁴.

La Universidad en Chile opera como una promesa de mejora social para un amplio segmento de la población. El título promete abrir las posibilidades de acceso no sólo al conocimiento, sino también a un capital simbólico que recién a fines de los 60 empezó a democratizarse un poco, y lo hizo sólo durante un breve tiempo. Por eso es terrible para las familias cuando una Universidad, Instituto o Centro Profesional desaparece, como nos lo recuerda el caso de la Universidad de La República, entre muchos ejemplos. Lo que las administraciones de la Concertación intentaron subvertir con medidas paliativas, que además estaban dirigidas por la lógica del mercado y a beneficiar los proyectos educativos de los cuales eran dueños. Es importante recordar que el presidente de la Corporación de Universidades Privadas es Daniel Farcas (UNIACC), activo militante del PPD, ha insistido varias veces en que debiera terminarse con el aporte fiscal directo a las universidades estatales⁵. Esto ha resultado en un difícil e intrincado límite entre el mito, la falacia y el fraude respecto a la bondad del sistema.

De ahí que las principales peticiones de los estudiantes sigan esperando desde décadas a que se cumplan:

1) Asumir la responsabilidad de parte del estado para con sus universidades. La red de Universidades del estado que antes componían la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado no ha corrido la misma suerte en el sistema neoliberal. Mientras algunas han logrado mantener la investigación, la docencia y la selectividad estudiantil, autogenerando recursos que les permiten ser “competitivas” en el mercado universitario, otras se encuentran virtualmente en quiebra. Pero, no sólo el estado no se hace cargo del financiamiento de las instituciones de su propiedad, sino que además en algunos casos le dificulta su funcionamiento en términos de competitividad económica. Para las universidades del estado que éste sea su dueño no le aporta nada significativo desde el ámbito económico y sí las dificultades de la burocracia, como ha quedado en claro en

² Para un mapa de la cuestión véase:

http://www.opech.cl/editoriales/2009_11/acceso_educacion_superior_chile.pdf

³ Véase la entrevista a Jesús Redondo “Si no hay equidad la calidad no existe” en: www.uchile.cl

⁴ Sobre un 84% es aporte privado y de este más del 80% lo hacen las familias. Para más información, véase Kremerman, M. *El Desalojo de la Educación Pública*:

http://www.opech.cl/inv/investigaciones/Kremerman_Desalojo_Universidad_Publica.pdf

⁵ Ver entrevista a Daniel Farcas en “El Diario Financiero”, edición de octubre de 2008.

estos días gracias al terremoto. Por ello, los estudiantes de estas instituciones han solicitado un nuevo trato del Estado con sus Universidades, que las oriente en dirección a proyectos regionales y de país. Que les otorgue una institucionalidad que les permita fortalecer su rol público. Para ello han propuesto diseñar un sistema estatal que funcione desde la cooperación inter universitaria y en función de objetivos estratégicos nacionales, que sustituyan a la lógica perversa de la competencia por financiamiento y la creación de un “mercado” entre universidades públicas. Esto implica redefinir el rol social de las universidades, el modo de medirlo y la inversión necesaria para ello. Es un debate país que no puede ser entregado a la opinión de un panel de expertos, como sucedió en el consejo asesor (un sucedáneo democrático) citado por la administración anterior, que terminó con la salida de todo el bloque social.

2) Otro petitorio ha sido la revisión de los procedimientos de acceso a la educación superior. La PSU está plenamente asociada a las condiciones socioeconómicas de las familias, de los centros escolares a que asisten los estudiantes y de la capacidad de pago de un pre universitario, como lo han mostrado numerosos estudios. Por ello diversas propuestas han surgido para re-democratizar las Universidades de alta selectividad, devolviéndole el acceso a los sectores populares. Para que ello suceda es necesario universalizar las posibilidades de acceso y generar propedéuticos educativos, como sucede en muchos países de Latinoamérica y Europa, cuyas Universidades tienen más reconocimiento académico que las chilenas (por poner sólo dos nombres: UNAM y de Buenos Aires). Pero, también es necesario ayudar a la mantención económica de estos estudiantes.

3) Otra solicitud histórica ha sido la eliminación del AFI (Aporte Fiscal Indirecto) actual. Por él se premia a los 27500 mejores puntajes en la PSU. Supuestamente el objetivo de él es fomentar la excelencia de los estudiantes. Sin embargo ha mostrado ser una forma regresiva de política pública en educación superior, pues desfocaliza el gasto público, haciendo que la mayor parte sea invertida en jóvenes de clase alta que asistieron a escuelas con mejor rendimiento en la PSU, tuvieron acceso a preuniversitario y poseen más capital cultural. Además este fondo acentúa la diferencia entre las universidades burbuja (varias privadas) y las de garaje (varias públicas).

4) Otra solicitud ha sido el ordenamiento de la educación superior en Chile. Entre otros criterios para ello se plantea la eliminación del lucro en la educación superior con fondos estatales. Esto incluye los fondos de concurso, las becas, el crédito solidario, el crédito con aval del estado, las donaciones con descuento fiscal, etc. Para poder acceder a cualquier tipo de financiamiento público se ha planteado que es necesario exigir al menos: acreditación, no lucro, patrimonio propio y estabilidad laboral de profesores en planta, cuenta pública y participación de la comunidad. Además el acceso de las universidades a la condición de colaboradoras de la función del estado exige al menos incorporar: criterios de no discriminación en el acceso y en la selección de profesores, organización interna

que garantice los procedimientos democráticos en la elección de las autoridades y participación de todos los miembros de la comunidad universitaria.

5) En el área de los CFT y los IP las solicitudes han planteado que se transformen en Institutos Tecnológicos Superiores (ITS) con acreditación obligatoria. Junto a ello se pide una provisión estatal paralela a la que da el mercado. Para ello se ha propuesto la creación de ITS estatales por cada territorio educativo con las mismas características exigidas a las Universidades estatales (es decir acceso universal, triestamentalidad, elección de autoridades, etc.), de forma de garantizar una oferta pública de calidad en la formación técnica.

Estas son sólo algunas problemáticas y propuestas para la educación superior y no agotan el proceso de democratización de ella, indefectiblemente unida al de la sociedad que la alberga.